

Santiago, treinta de agosto de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

1º) Comparecen ante este tribunal, el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en causa RIT O-3520-2023, acumulada con la causa RIT O-3798-2023, don Manuel Fernando Ramírez Zamora, técnico electrónico, cédula de identidad número 11.601.807-1 con domicilio en Los Húsares 1505, comuna de Quilicura y don Walter Segundo Robles Toro, explotador de sistemas, cédula de identidad número 12.674.227-4, con domicilio en pasaje Churco 05971, Villa Valle Del Sol, comuna de Puente Alto, e interponen demandas de despido injustificado y cobro de prestaciones, contra Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., del giro de su denominación, representada por Moisés Ramón Carrasco Yáñez, domiciliados en Avenida Costanera Sur 2760, piso 22, comuna de Las Condes.

En cuanto al señor Ramírez, refiere que prestó servicios entre el 1 de noviembre de 1998 hasta el 28 de marzo de 2023 para la demandada, desempeñando como último cargo el de ingeniero senior. Indica que trabajaba en la gerencia de operaciones, la que estaba integrada por el jefe directo del área, John Muñoz Ortega, ocho ingenieros y cuatro trabajadores de empresas externas. Señala que, para los efectos previstos en el artículo 172 del Código del Trabajo, su remuneración ascendía a \$2.463.90. Indica que el 28 de marzo de 2023 fue despedido por necesidades de la empresa en base a una supuesta reestructuración, pero que, sin embargo, su cargo, funciones y lugar de trabajo continúan existiendo, siendo sus labores repartidas entre otros trabajadores. Afirma que el 11 de abril de 2023, el concurrió a la notaría indicada por la empresa donde firmó un finiquito con



expresa reserva de derechos. Señala que en dicho documento se expresan, entre otros montos, una indemnización por años de servicio de \$27.102.95 y una indemnización voluntaria de \$ 32.030.765.

En cuanto al señor Robles, indica que trabajó para la demandada desde el 14 de agosto de 2009 hasta el 28 de marzo de 2023, desempeñando el cargo de explotador de sistemas senior, el que desarrollaba conjuntamente con otros tres compañeros de trabajo y tres supervisores. Señala que su última remuneración, para los efectos previstos en el artículo 172 del Código del Trabajo, era de \$1.975.651. Señala que el 28 de marzo de 2023, fue despedido por necesidades de la empresa en base a una supuesta reestructuración. Sin embargo, afirma que la unidad donde trabajaba, cargo y funciones desempeñadas continúan existiendo. Luego, señala que el 11 de abril de 2023, el concurrió a la notaría indicada por la empresa donde firmó un finiquito, el que contenía, entre otros, los siguientes montos: indemnización por años de servicio: \$ 21.732.161; indemnización voluntaria: \$ 5.926.953; y descuento AFC: \$ 4.893.570.

Alegan que sus despidos fueron injustificados, ya que los servicios que prestaban siguen siendo necesarios para la empresa, y porque en sus cartas de término no señalan hechos fundantes de sus despidos sino que sólo contienen alegaciones genéricas e indeterminadas. Concluyen que no existieron circunstancias externas objetivas que obliguen al empleador a despedirles, y que las reestructuraciones de sus áreas no fueron tales, ya que éstas siguen operativas.

Solicitan declarar injustificados sus despidos y condenar a la demandada al pago del recargo de sus indemnizaciones por años de servicio, pero considerando por tales los montos equivalentes a las sumas

pagadas bajo dicha denominación sumados a los pagos a título de indemnización voluntaria. Lo anterior, atendido a que consideran que éste último concepto corresponde precisamente a una indemnización por años de servicio conforme al artículo 163 inciso del Código del Trabajo, conforme al principio de la primacía de la realidad, ya que lo que se habría pactado verbalmente sería una indemnización sin topes de UF ni de años, y prueba de ello sería que al dividir la misma en la cantidad de años trabajados por cada actor el resultado no es otro que el valor de una remuneración de 30 días. Agregan que así se ha obrado por la demandada en todos los casos de trabajadores despedidos por dicha la misma causal en y en la misma época, pero que por razones tributarias y contables la demandada no ha escriturado esta política.

En consecuencia, el primer demandante solicita el pago de \$17.740.116 por concepto de 30% de recargo, y el segundo el pago de \$8.297.734 por concepto de 30% de recargo y de \$4.893.570 correspondiente a la devolución del descuento en su finiquito por concepto de aporte del empleador al seguro de cesantía.

**2º)** La demandada reconoce haber sido empleadora de los demandantes de autos, durante las fechas que éstos refieren en sus libelos, mas asegura que sus despidos fueron debidamente justificados, y niega la procedencia del recargo y la restitución de su aporte al seguro de cesantía demandados.

Sostiene que se explicó en la carta de aviso que sus despidos se debieron a la necesidad de reducir costos de la empresa, en atención a una importante disminución de ingresos, causados por continuos y permanentes cambios que ha experimentado el mercado de las telecomunicaciones. De

este modo estima que en el presente caso, se configuran todos los elementos que hacen procedente un despido por la causal invocada, agregando que se decidió prescindir no solo de los servicios de los demandantes, sino que de reestructurar sus áreas, lo que involucró a más de 100 personas.

Defiende la procedencia del descuento por aporte del empleador seguro cesantía empleador, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 19.728.

Finalmente, y ante el evento que se acoja la acción de despido, señala que no es procedente el recargo demandado, atendido que éste sólo puede aplicarse respecto de la indemnización establecida en el artículo 163 inciso segundo del Código del Trabajo, tal como se desprende del tenor del artículo 168. A su vez, afirma que a los demandantes se les pagó la indemnización correspondiente, con respeto a los topes legales, establecidos en el artículo 172, también del código laboral.

Conforme a lo expuesto, solicita el rechazo de las demandas en todas sus partes.

**Y considerando:**

**Primero:** Que, de acuerdo a lo expuesto, y según lo establecido en las respectivas audiencias preparatorias, la presente controversia radica en determinar si, son efectivos los hechos contenido de las comunicaciones de término de los servicios entregadas a los trabajadores, y, en caso afirmativo, si ellos permiten justificar los despidos de los demandantes en la causal invocada para tales efectos.

De estimarse la procedencia de las acciones de despido, corresponderá entonces determinar la correcta base de cálculo del recargo

demandado, esto es, si habría de considerarse la indemnización por años de servicio respetando los topes legales, o bien, una que comprenda también la indemnización voluntaria que aparece en los respectivos finiquitos de los actores. También habrá de emitirse pronunciamiento respecto de la procedencia del descuento efectuado por la empresa demandada respecto de su aporte al seguro de cesantía en relación con el demandante Walter Robles.

**Segundo:** Que, para acreditar sus dichos, las partes incorporaron copias de los contratos de trabajo, las cartas de despido y de los finiquitos de los demandantes, y del convenio colectivo del Sindicato Nacional N°1 de Entel-Chile, del 25 de octubre de 2017. Desde ya se tiene presente que los contenidos de los finiquitos y de los contratos de trabajo no ha sido controvertidos.

Adicionalmente, la demandada aportó una nómina de desvinculaciones de marzo de 2023 y un comunicado enviado por la vicepresidencia de personas, a nombre del Gerente General de la empresa. Asimismo, se escuchó el testimonio de don Jorge Hernández Alarcón, jefe de área de administración de personas, quien señaló que no conoce directamente a los demandantes ni el cargo que desempeñaban, pero que sí formaban parte de la nómina de la empresa. Sostiene que el proceso de reestructuración conllevó la salida de 280 personas, por motivos económicos y financieros, en virtud del cual los trabajadores despedidos no fueron reemplazados, sus funciones fueron absorbidas por otros trabajadores, o bien, eliminadas. Respecto a las indemnizaciones voluntarias pagadas, señala que eran habituales, pero que dependían de razones de desempeño o trayectoria, por lo que variaban dependiendo de



cada trabajador. Finalmente, incorporó la respuesta del oficio evacuada por la Dirección del Trabajo, en el que consta que, entre el 29 de marzo y el 17 de abril de 2023, se informó por la empresa de la desvinculación de aproximadamente 190 trabajadores, en su gran mayoría por la causal establecida en artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo.

Las cartas de despido son de idéntico tenor, se fundan en términos generales a la necesidad de racionalización y reestructuración que afecta al área donde se desempeñaba cada trabajador, debiendo ajustar las actividades, lo que sería inevitable debido a continuos cambios en la industria de las telecomunicaciones, y a un ciclo de poco crecimiento y de exigentes inversiones. De lo anterior se desprende que no se invoca ningún hecho específico, sino que a meras calificaciones o apreciaciones respecto de hechos imprecisos.

Los únicos hechos señalados son cambios en la industria, un ciclo de poco crecimiento y de inversiones. No se precisa cuál sería el ciclo de poco crecimiento, ni a qué se refiere con que habría sido poco, tampoco se detallan cuáles serían las inversiones ni por qué serían exigentes, ni menos aún se señalan cuáles serían los continuos y permanentes cambios de la industria ni a qué se refiere con que ésta forme parte de un sector agresiva competencia. Al no haberse invocado hechos que puedan ser acreditados, no será posible justificar los despidos de los actores, conforme a lo establecido en el artículo 454 N°1) del Código del Trabajo, y por tanto, se declararán como injustificados.

**Tercero:** Que, por su parte, los demandantes aportaron un set de diez finiquitos de trabajadores despedidos por la demandada, y dos copias duplicada del Contrato colectivo celebrado entre Sindicato de Ingenieros



Civiles de Entel y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. de fecha 18 de mayo de 2022.

En cuanto a los instrumentos colectivos tenidos a la vista, cabe tener presente lo alegado por las partes al respecto. En primer término, ha de constatarse que los demandantes no alegan haber sido beneficiarios de dichos acuerdos, ni formar parte de algún sindicato, mientras que los documentos tenidos a la vista no contienen la nómina de trabajadores respectiva. Luego, y tal como se señalan en las demandas, en los contratos colectivos se pacta que el pago de indemnizaciones por término de contrato se regirá por las normas del Código del Trabajo, y solo se reconoce expresamente el pago de la indemnización por años de servicios sin topes para los casos de retiro voluntario, lo que no ocurre en la especie.

Se alega por los demandantes que por razones tributarias y contables la demandada no ha escriturado la verdadera naturaleza de las indemnizaciones pagadas, por sin explicar cuál sería el beneficio de la empresa si decide pagar una indemnización voluntaria superior a la legal y que no conste en acuerdo alguno, por lo que se desestimaré dicha alegación, considerando que, para tales efectos, el artículo 31 N°6 de la Ley sobre Impuesto a la Renta no efectúa distinciones.

**Cuarto:** Que, al contestar las demandas, la ex empleadora reconoce haber pactado con los demandantes el pago de una indemnización superior a la legal, dando a entender que lo pagado correspondía a la indemnización establecida en el artículo 163 inciso primero del Código del Trabajo, ya que fue convencional y superior a la legal.

Sin embargo, sostiene que el recargo demandado ha de calcularse sobre la base de la indemnización por años de servicio con respeto de los



topes legales, esto es, 990 UF, dado que cada actor trabajó más de 11 años para a empresa. Así se desprendería de lo señalado en el artículo 168 del Código del Trabajo.

Al respecto, cabe tener presente lo dispuesto en dicha norma: “(...) caso, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la de los incisos primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, aumentada esta última de acuerdo a las siguientes reglas: a) En un treinta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación improcedente del artículo 161”

De este modo, la disputa entre las partes radica en determinar qué ha de entenderse cuando el legislador emplea la expresión: “esta última”, ya que bien podría interpretarse que se refiere a la del inciso segundo del artículo 163, pero también es posible entender que alude a la del inciso primero o segundo según correspondiere en cada caso, es decir, según cuál haya sido la que en los hechos se pagó al trabajador.

Se estima que la interpretación propuesta por la demandada es correcta, ya que no significa un desmedro respecto de los derechos de los trabajadores, considerando que la indemnización regulada en el inciso primero del Código del Trabajo nunca será inferior a la legal. A su vez, una interpretación contraria conllevaría un desincentivo al pago de indemnizaciones convencionales superiores a las mínimas establecidas en la ley, ya que de declararse injustificado el despido la sanción al empleador que procuró beneficiar de dicha forma a sus trabajadores sería mayor a aquella que se aplicaría al empleador que se limitó a pactar la indemnización mínima establecida por el legislador, por lo que, a la luz del artículo 24 del Código Civil, sería una interpretación contraria al espíritu

general de la Ley. Finalmente, al ser una sanción la establecida en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, ha de ser interpretada de forma restrictiva.

De este modo, se condenará al pago del recargo establecido en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, calculado sobre la base de la indemnización por años de servicio pagada, conforme a lo señalado en los finiquitos, respetándose los límites impuestos en los incisos segundo del artículo 163 y cuarto del artículo 172 del mismo código. Así, a Manuel Fernando Ramírez Zamora le corresponderán \$8.130.887, y a Walter Segundo Robles Toro la suma de \$6.519.648, por dicho concepto.

**Quinto:** Que, habiéndose establecido que su despido fue injustificado, la demandada se verá también obligada a pagar al demandante Walter Segundo Robles Toro el aporte al seguro de cesantía que descontó, no obstante su alegación en relación a la facultad que le otorgaría el artículo 13 de la Ley N° 19.728.

La correcta interpretación de dicha norma permite concluir que ésta parte de la premisa que se está frente a un trabajador que es despedido por alguna de las causales del artículo 161 del Código del Trabajo, situación que no es posible establecer en el caso de autos, como ya se explicó en los considerandos anteriores.

Ha de entenderse que el legislador busca con dicha norma beneficiar al empleador que se ha visto golpeado por contingencias externas y objetivas, que lo han llevado a la necesidad de despedir a uno o más trabajadores, por lo que ese descuento se reserva a esta causal objetiva y externa, de modo que si el empleador no se encuentra en aquellas

circunstancias, o así no lo acredita, como ocurre en la especie, no existe causa para el beneficio del que pretende gozar.

Lo contrario importaría que el beneficio del empleador, y a la vez perjuicio del trabajador, dependería únicamente de la voluntad del primero, y no de la situación fáctica y objetiva prevista por el legislador, motivo suficiente para descartar una interpretación en dicho sentido.

Se tiene presente que, tal como se dejó constancia en la audiencia preparatoria, la demandada reconoció expresamente los montos descontados por este concepto, indicados en el escrito de demanda.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 24 y 1698 del Código Civil, 13 de la Ley N° 19.728, 9, 161, 163, 168, 172, 420, 456 y siguientes, 456 y 459 del Código del Trabajo, **se declara** que:

I.- Se acogen las acciones de despido, y se declara que aquellos de que fueron objeto los demandantes, Manuel Fernando Ramírez Zamora y Walter Segundo Robles Toro, de parte de la demandada, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., el día 28 de marzo de 2023 fueron injustificados;

II.- Se acogen parcialmente las acciones de cobro de indemnizaciones y prestaciones, en el sentido que se condena a la demandada, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., al pago de las siguientes sumas:

1.- Al demandante Manuel Fernando Ramírez Zamora, \$8.130.887 a título de aumento de la indemnización por años de servicio establecido en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo;



2.- Al demandante Walter Segundo Robles Toro, \$6.519.648 a título de aumento de la indemnización por años de servicio establecido en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, y \$ 4.893.570 correspondientes a la restitución del descuento indebido efectuado por su empleador al seguro de cesantía;

III.- Las sumas indicadas en el numeral anterior se reajustarán y devengarán intereses conforme a los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, según corresponda;

IV.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

**RIT O-3520-2023**

**RUC 23- 4-0483880-6**

**Dictada por SANTIAGO PEÑA BAZAN, Juez del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.**

